

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA:


PROYECTO DE LEY NÚMERO 280 del 2020 Cámara y 158 del 2020 Senado

Modifíquese el artículo 33 del proyecto de Ley 280 del 2020 Cámara y 158 del 2020 Senado “Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de vivienda y hábitat” el cual quedará así:

ARTÍCULO 33. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA. Adicionase el parágrafo 2 al artículo 85 de la Ley 388 de 1997 el cual quedará así:

“Parágrafo 2º. La participación en plusvalía que se ocasione en virtud de los hechos generadores del artículo 74 de la presente ley, se podrá destinar a la ejecución de obras de infraestructura de carga general en el suelo en el que se efectuó el cambio de clasificación, siempre y cuando las cargas generales, su localización y los mecanismos para hacerlas efectivas estén contempladas en el respectivo plan de ordenamiento territorial.

Con el objeto de garantizar su ejecución, se podrán celebrar acuerdos de pago en especie en virtud de los cuales los propietarios o sujetos pasivos podrán celebrar contratos de fiducia en los que las entidades territoriales serán las beneficiarias y tendrán participación y control en las decisiones de las instancias decisorias del fideicomiso, y cuyo objeto consista en la ejecución de obras de infraestructura vial, de servicios públicos, domiciliarios, áreas de recreación y equipamientos sociales, entre otras obras de carga general.”



Ángela María Robledo
Representante a la Cámara
Colombia Humana



María José Pizarro
Representante a la Cámara
Coalición Lista a la Decencia

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con el artículo 82 de la Constitución Política el derecho de las entidades públicas a participar en las plusvalías generada por su acción urbanística es un derecho colectivo, vinculado "...a la regulación de la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa de interés común".

Hay un doble mandato constitucional: garantizar un derecho colectivo y defender el interés común. Por tanto, abrir la puerta a la privatización de los recursos que concretan la participación en plusvalías es inconveniente, porque en su recuperación para la colectividad y su destinación debe primar una visión que priorice el interés general sobre el particular y que cumpla con objetivos de equidad y distribución socio-espacial de los recursos.

De otra parte, el artículo está confundiendo de manera inconveniente dos instrumentos de recuperación de plusvalías que son distintos:

El artículo 85 de la ley 388 de 1997 contempla como destinación del tributo llamado participación en plusvalía, entre otros, los siguientes:

"3. Ejecución de proyectos y obras de recreación, parques y zonas verdes y expansión y recuperación de los centros y equipamientos que conforman la red del espacio público urbano.

4. Financiamiento de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo de interés general".

Las cargas generales son otro instrumento diferente, que no es de naturaleza tributaria, que está basado en lo dispuesto en los artículos 37 y 39 de la ley 388. Los municipios pueden aprobar e implementar los dos, pero no se pueden confundir.

Si un municipio establece en su POT cargas y obligaciones urbanísticas generales, están deben estar establecidas de manera precisa, en cuanto a sus condiciones, sus formas de cálculo y su destinación. Las condiciones de implementación de la participación en plusvalías se establecen en un acuerdo de carácter general.

Si se aprueban las cargas generales se va a reducir el pago de la participación en plusvalía, pero se van a obtener beneficios directos en términos de suelo y de ejecución de obras para elementos estructurantes como los sistemas de transporte masivo, las infraestructuras viales o de servicios públicos o el espacio público.

Lo que no es admisible es establecer la posibilidad de que caso por caso, incluso por iniciativa de los particulares, se afecten unos recursos tributarios para destinarlos a unas obras en el mismo lugar en que se generan.

Debe haber criterios generales en los POT y debe haber un control por parte de las administraciones distritales o municipales sobre la destinación de los recursos, que son de naturaleza tributaria, y deben cumplir con todas las reglas propias de los tributos.

Las experiencias de privatización de impuestos o tributos en varias ciudades colombianas han resultado en efectos inconvenientes de deterioro de la capacidad pública de gestionar los recursos y en graves riesgos de corrupción.